

# Presencia o ausencia del concepto des-restauración en la legislación catalana

Raquel Lacuesta Contreras, Doctora en Historia del Arte

## La Ley de Patrimonio Cultural

En ella se establecen tres categorías de bienes culturales inmuebles:

- Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN)
- Bien Cultural de Interés Local y Bien Catalogado (BCIL y BC)
- Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural Catalán (BIPCC), que son los restantes y que forman

parte de los inventarios redactados y publicados, ya sea por las diferentes administraciones públicas como por instituciones o entidades privadas. Es una categoría que viene a ser como el *cul de sac* de aquellos elementos que quedan fuera de la protección que les otorga la declaración monumental por parte de la LPCC o por las figuras de planeamiento; en este sentido, los inventarios del conjunto de BIPCC de un municipio pueden constituir documentos previos a la redacción de los catálogos municipales y no deberían ser menospreciados en las posibles intervenciones.

Pero aun existiendo esta clasificación, a la hora de prevenir las intervenciones, la LPCC sólo hace mención a las dos primeras categorías: el Departamento de Cultura de la Generalitat o los ayuntamientos pueden *obligar a los propietarios de inmuebles declarados BCIN o BCIL a la ejecución de las obras* que sean necesarias para preservarlos, conservarlos o mantenerlos en buen estado (LPCC, Art. 67.1).

No es más explícita en términos de criterios de actuación, pero por defecto, y aplicando literalmente su espíritu, no parece que dé oportunidades a la de-restauración ni a la deconstrucción, desmontaje o eliminación de una de sus partes, en el caso de que la declaración monumental o la normativa específica de la catalogación no determine cuáles de sus partes pueden ser objeto de alguno de estos presupuestos.

Pero en teoría, quien ha de decidir sobre la idoneidad de las actuaciones son las comisiones de patrimonio creadas *ad hoc*. Veamos qué papel les otorga la LPCC:

Según el Art. 6 de la LPCC, los municipios que tienen la consideración de histórico-artísticos *han de crear un órgano de estudio y propuesta* para la preservación, la conservación, la protección y la vigilancia de su patrimonio cultural. Estos órganos pueden ser comisiones de patrimonio creadas *ad hoc*, constituidas a iniciativa de los ayuntamientos o de los consejos comarcales (en el caso de que se trate de municipios de menos de 1.000 habitantes) e integradas por miembros de los gobiernos locales y comarcales, en los cuales pueden participar entidades culturales.

En cualquier caso, los órganos o comisiones han de contar necesariamente con el *soporte de profesionales cualificados* en el campo del patrimonio cultural, con la formación o titulación que sea establecida por reglamento.

Si tenemos en cuenta que las leyes de patrimonio y de urbanismo vigentes definen el patrimonio inmueble desde los puntos de vista de los valores urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico y arqueológico, entre otros, se sobreentiende que la formación o titulación deberá tener una relación

directa con los valores citados. Por tanto, parece que los títulos más adecuados para el cometido específico de protección de bienes inmuebles son los de arquitecto, historiador o historiador del arte y arqueólogo, siempre que tengan experiencia demostrada en la materia.

### Obligaciones de los propietarios y del municipio

Según el Art. 21 de la LPCC, todos los bienes integrantes del patrimonio cultural catalán (BIPCC) *han de ser conservados por sus propietarios*, titulares de otros derechos reales y poseedores, que tienen, además, la obligación de *facilitar información* sobre el estado de los bienes y sobre su utilización, cuando se lo pide la Administración.

Los ayuntamientos tienen la obligación de *suspender cualquier obra o intervención* en un BIPCC *que no esté declarado de interés nacional* e informar de ello al Departamento de Cultura. Si no lo hace, el mismo Departamento puede impedir las obras y adoptar las medidas necesarias para la efectividad de la suspensión (LPCC, Art. 23.1).

Los ayuntamientos tienen también potestad para *suspender la tramitación de la concesión de una licencia de obras*, con el fin de preservar los valores culturales de un bien inmueble y de proponer al Departamento de Cultura la incoación de un expediente para declararlo BCIN (LPCC, Art. 23.2, Art. 52 y Art. 77).

Los propietarios, titulares o poseedores de los inmuebles declarados BCIN o BCIL, tienen *la obligación de preservarlos y mantenerlos en buen estado*, y vigilar para que el uso al que se destinen garantice siempre su conservación. En ningún caso pueden destruirlos, y han de permitir la entrada a especialistas para poder estudiarlos. Esta obligación se extiende a los edificios de propiedad pública y privada (LPCC, Art. 25).

Los propietarios, titulares o poseedores de inmuebles declarados BCIN *han de presentar al Departamento de Cultura un programa de actuación* de conservación en el caso que sea necesario realizar obras de mantenimiento de los bienes (LPCC, Art. 29).

Las obras o intervenciones en un BCIN han de ser autorizadas por el Departamento de Cultura antes de proceder a la concesión de la licencia; han de incluir un informe sobre los valores históricos, artísticos y arqueológicos, y sobre el estado actual del inmueble, y también de evaluación del impacto de la intervención que se propone en el edificio y en el entorno (LPCC, Art. 34.1, 2 y 3).

Ello implica que se apliquen obligatoriamente *los criterios básicos y generales de intervención* establecidos en la LPCC (Art. 34.4 y 35), así como los criterios específicos que puede contener cada declaración, sin perjuicio del margen de apreciación discrecional necesario para valorar en cada supuesto la compatibilidad de la intervención proyectada con la preservación de los valores culturales del bien.

En cuanto a esos criterios básicos y generales de intervención en edificios, conjuntos y entornos monumentales declarados BCIN, la LPCC es taxativa respecto a la salvaguarda de los valores históricos, arquitectónicos, artísticos, urbanísticos y ambientales; a cambios de uso; volumen, tipología, morfología y cromatismo; eliminaciones no justificadas; rotulaciones, instalaciones añadidas en fachadas y cubiertas; siluetas paisajísticas, parcelaciones, alteraciones en la edificabilidad e instalaciones urbanas; visualización, geomorfología y topografía (LPCC, Art. 35). Estos criterios son los que se detallan a continuación.

1. Cualquier intervención en un monumento histórico, un jardín histórico, una zona arqueológica o una zona paleontológica de interés nacional ha de respetar los criterios siguientes:

a) La conservación, la recuperación, la restauración, la mejora y la utilización del bien han de respetar los valores que han motivado la declaración, sin perjuicio de que pueda ser autorizado al uso

de elementos, técnicas y materiales contemporáneos para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar determinados elementos o de las épocas.

b) Se ha de permitir el estudio científico de las características arquitectónicas, históricas y arqueológicas del bien.

c) Se han de conservar las características tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y morfológicas más remarcables del bien.

d) Está prohibido reconstruir total o parcialmente el bien, excepto cuando se utilicen partes originales, y de añadir elementos miméticos que falseen la autenticidad histórica.

e) Está prohibido eliminar partes del bien, excepto en el caso que comporte la degradación de éste o que la eliminación permita su mejor interpretación histórica. En estos casos, hay que documentar las partes que hayan de ser eliminadas.

f) Está prohibido colocar publicidad, cables, antenas y conducciones aparentes en las fachadas y cubiertas del bien y de construir instalaciones de servicios públicos o privados que alteren gravemente su contemplación.

2. Las intervenciones en los conjuntos históricos de interés nacional han de respetar los siguientes criterios:

a) Se ha de mantener la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permiten modificaciones de alineaciones, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, excepto que contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto.

b) Están prohibidas las instalaciones urbanas, eléctricas, telefónicas y cualquier otra, tanto aéreas como adosadas a la fachada, que se han de canalizar enterradas. Las antenas de televisión, las pantallas de recepción de ondas y los dispositivos similares se han de situar en lugares en que no perjudiquen la imagen urbana de parte del conjunto.

c) Está prohibido colocar anuncios y rótulos publicitarios. Los rótulos que anuncien servicios públicos, los de señalización y los comerciales han de ser armónicos con el conjunto.

3. El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de protección de los bienes inmuebles de interés nacional no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien. En los entornos de los inmuebles de interés nacional está prohibido cualquier movimiento de tierras que comporte una alteración grave de la geomorfología y la topografía del territorio y cualquier vertido de basuras, escombros o desperdicios.

La Administración de la Generalitat o los ayuntamientos han de ordenar a los responsables de *daños causados ilícitamente* a inmuebles declarados BCIN o BCIL, las reparaciones necesarias para *restituir el bien a su estado anterior*, independientemente de la sanción que corresponda (LPCC, Art. 68). Son responsables de estas infracciones los propietarios, los titulares de derecho y los poseedores, los promotores y los directores de las obras, en lo que respecta a bienes inmuebles; y los autores, cómplices o encubridores, en lo que respecta a intervenciones arqueológicas no autorizadas (LPCC, Art. 72).

## **El Reglamento de la Ley de Urbanismo, de 2006**

El texto define y desarrolla una serie de conceptos, obligaciones y posibilidades de actuación que afectan al patrimonio urbano y rural, con especificidad de las masías, aunque no profundiza en aspec-

tos de criterios de intervención. Un paso importante de la Ley de urbanismo es la obligatoriedad de incluir las masías en un catálogo si los propietarios desean llevar a cabo actividades diferentes a las propiamente agrícolas, como por ejemplo las derivadas de la hostelería.

El Art. 3, referido al *Concepto de desarrollo urbanístico sostenible*, establece en el apartado f) como uno de sus fines *La protección del patrimonio cultural mediante la conservación, la recuperación y mejora de los inmuebles que lo integran, de los espacios urbanos relevantes, de los elementos y tipologías arquitectónicos singulares, de los paisajes de valor cultural e histórico y de las formas tradicionales de ocupación humana del suelo.*

El Art. 29, *Deberes de uso, de conservación y de rehabilitación*, determina que:

- Los propietarios de inmuebles están obligados a destinarlos a los usos previstos por la ordenación urbanística, y a cumplir los deberes de conservación y rehabilitación establecidos por esta Ley y su Reglamento, por la legislación sectorial y por las ordenanzas locales.

- En este deber están incluidos aquellos deberes de conservación y rehabilitación que determine la legislación sectorial o que establezcan las normas de protección del patrimonio cultural de los planes urbanísticos.

Según el Art. 55, *Reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales*, es admisible la reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales para destinarlas a vivienda unifamiliar, a establecimiento de turismo rural o de actividades de educación en el ocio y de restauración, siempre y cuando estén incluidas por parte del planeamiento urbanístico general o especial en el catálogo previsto por la Ley de urbanismo a estos efectos. También se pueden destinar a establecimiento hotelero, con exclusión de hotel apartamento, si lo prevé expresamente el catálogo, el cual puede establecer un límite del número de plazas.

El mismo Art. 55, en el apartado 2, determina que el planeamiento urbanístico general o especial ha de identificar en el catálogo las masías o casas rurales que son susceptibles de reconstrucción o rehabilitación para destinarlas a los usos previstos en el apartado anterior, y ha de justificar las razones arquitectónicas, paisajísticas o sociales que fundamentan su preservación o recuperación. Ahora bien, la reconstrucción y la rehabilitación del patrimonio arquitectónico rural han de respetar el volumen edificado preexistente y la composición volumétrica original previamente determinados, y las posibles actuaciones o nuevas construcciones de carácter auxiliar que admita el planeamiento urbanístico no pueden afectar a los valores arquitectónicos y paisajísticos concurrentes y han de estar justificadas en el desarrollo de los usos permitidos.

Más adelante, el Reglamento determina qué documentación han de incorporar los proyectos de actuaciones específicas: una justificación de la finalidad del proyecto, un anteproyecto de la actuación, actividad o construcción referido al emplazamiento y extensión de las fincas y sus características, y un estudio de impacto e integración paisajística.

El Art. 75 se refiere a *Catálogos de bienes protegidos*, que incluyen el resto del patrimonio en medio urbano, si bien no determina un método, ni que sea orientativo, a seguir en la catalogación, ni los conceptos que deberían incluirse para que ésta tuviera cierto carácter científico.

El Art. 92 se refiere a los *Planes especiales urbanísticos*. Se consideran compatibles con el planeamiento general y no requieren su modificación previa, los PEU que establezcan determinaciones de protección del patrimonio cultural, del paisaje y de los valores ambientales concurrentes, o que establezcan las limitaciones de uso necesarias para ordenar la incidencia y los efectos urbanísticos, ambientales y sobre el patrimonio urbano que las actividades producen sobre el territorio, siempre que no alteren los usos principales establecidos por el planeamiento general.

El Art. 93, en el apartado 2, determina que a los Planes especiales urbanísticos de protección de los valores ambientales, paisajísticos, del patrimonio arquitectónico o cultural o de otros valores, corresponden las siguientes determinaciones:

- a) Justificación e identificación de los elementos o ámbitos y valores objeto de protección.
- b) Definición y regulación de categorías diferenciadas de protección.
- c) El establecimiento de las medidas de protección adecuadas, como los usos admisibles o incompatibles, de las actuaciones y obras permitidas o prohibidas sobre los elementos o los ámbitos protegidos, de los parámetros edificatorios de obligado cumplimiento u otros.
- d) La regulación y programación de la ejecución de actuaciones de recuperación, rehabilitación o mejora de los elementos, ámbitos o valores objeto de protección.

Según el Art. 95, los catálogos de bienes protegidos han de contener la información física y jurídica necesaria y establecer el grado de protección al que están sujetos y el tipo de intervención o actuación posibles. La regulación de las actuaciones en los bienes protegidos por la legislación sectorial ha de estar conforme con la propia legislación derivada.

Por último, el Art. 264, *Procedimientos de protección de la legalidad urbanística*, determina que ésta ha de dar lugar a la instrucción y la resolución de un procedimiento o de más de uno que tienen por objeto, conjuntamente o por separado, la adopción de una serie de medidas, entre ellas la restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado, que tiene por objeto hacer efectiva la tutela y la protección de la normativa y del planeamiento urbanísticos, incluyendo también los actos de edificación.

## El Código Técnico de la Edificación

El único apartado que abre la puerta para una posible interpretación que pudiera redundar en la protección de un inmueble es el Capítulo 1, *Disposiciones Generales*, en su Art. 2. *Ámbito de aplicación*, apartado 3, que dice expresamente: *El Código Técnico de la Edificación se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables.*

Está claro que en ningún caso se habla de manera expresa del tema de la des-restauración, pero la interpretación que se haga en los casos referidos al patrimonio arquitectónico podría resultar positiva o negativa en función de los conceptos que se primen. En cualquier caso, aun cuando no exista de momento un Reglamento que lo desarrolle, el Código tiene en cuenta la posibilidad de actuar en el patrimonio de manera diferente al resto de las edificaciones.

Por obras de rehabilitación entiende que son *aquellas que tienen por objeto actuaciones tendentes a lograr uno de los siguientes requisitos* (como vemos, sólo se habla de rehabilitación, con todo el peligro que puede encerrar este término):

- a) *La adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.*
- b) *La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a los que se refiere este Código. Se consideran, en todo caso, obras para la adecuación funcional de los edificios, las actuaciones que*

*tengan por finalidad la supresión de barreras y la promoción de la accesibilidad, de conformidad con la normativa vigente; o*

*c) La remodelación de un edificio con viviendas que tenga por objeto modificar la superficie destinada a vivienda o modificar el número de éstas, o la remodelación de un edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas.*

El punto 5 añade que *una obra es de rehabilitación integral cuando tenga por objeto actuaciones tendentes a todos los fines descritos en este apartado.*

La clasificación de los edificios atiende a lo que dispone la LOE, pero hay factores y criterios de evaluación que van asociados a una actividad particular del edificio, no previstas en la clasificación básica. Uno de estos factores es, precisamente, *el nivel de protección del edificio.*

## **Bibliografía**

**CÓDIGO** Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, de 17 de marzo

**LACUESTA, R.** *Els municipis i el patrimoni arquitectònic. Compendi legislatiu comentat.* Plecs, 5. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2003

**LACUESTA, R.** La importància de la inclusió de les masies en els inventaris i catàlegs municipals de protecció del patrimoni arquitectònic. *Mestall. Butlletí de l'Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines*, nº 19, junio 2006, pp. 3-8

**LEY** del Patrimonio Cultural Catalán 9/1993, de 30 de septiembre

**REGLAMENTO** de la Ley de urbanismo de Cataluña, D. 305/2006, de 18 de julio

**TEXTO** refundido de la LEY de urbanismo de Cataluña, D. 1/2005, de 26 de julio